

# ECUADOR Debate<sub>119</sub>

Quito/Ecuador/Agosto 2023

## La transnacionalización del crimen y la violencia



Crisis, caos y securitización. El itinerario del poder hacia un nuevo esquema de dominación

Conflictividad socio-política  
Marzo-Junio 2023

Ecuador en el concierto de la violencia de América Latina

La seguridad como excepción  
¿Hacia dónde va Ecuador?

El territorio unificado del crimen en el Ecuador

Violencia y delincuencia en el Ecuador: principales problemas, mitos y desafíos

Seguridad ciudadana: entre la violencia interpartidista, el conflicto armado y el narcotráfico. 1950-2022

Geografía de la violencia en México: el control territorial

La violencia que vimos ayer en la escuela

La huelga en la hacienda Llin-Llin (1979-1980)

Deriva necropolítica: violencia, temor y resignación en una política moderna agotada

**La transnacionalización  
del crimen y la violencia**

**Comité Editorial**

Alberto Acosta, José Laso Rivadeneira, Simón Espinoza, Fredy Rivera Vélez,  
Marco Romero, Hernán Ibarra, Rafael Guerrero, Eduardo Gudynas

**Directores**

Francisco Rhon Dávila (1992-2022)

José Sánchez Parga (1982-1991)

**Coordinadora/Editora**

Lama Al Ibrahim

**Asistente Editorial**

Gabriel Giannone

**ISSN: 2528-7761**

**ECUADOR DEBATE**

Diego Martín de Utreras N28-43 y Selva Alegre

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Tel: 2522763 - 2523262

E-mail: revistaec@caapecuador.org

www.caapecuador.org

**SUSCRIPCIONES**

Valor anual, tres números:

Exterior: USD\$. 51.00

Ecuador: USD\$. 21.00

Ejemplar suelto exterior: USD\$. 17.00

Ejemplar suelto Ecuador: USD\$. 7.00

**Diagramación y portada**

David Paredes

**Impresión**

El Chasqui Ediciones

---

Ecuador Debate, es una revista especializada en ciencias sociales, fundada en 1982, que se publica de manera cuatrimestral por el Centro Andino de Acción Popular. Los artículos publicados son revisados y aprobados por los miembros del Comité Editorial.

Las opiniones, comentarios y análisis son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de *Ecuador Debate*.

Se autoriza la reproducción total o parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente: © ECUADOR DEBATE. CAAP.

# | ÍNDICE

**PRESENTACIÓN** 5-8

## **COYUNTURA**

---

**Crisis, caos y securitización.**  
**El itinerario del poder hacia un nuevo esquema de dominación** 9-25  
Juan Cuvi

**Conflictividad socio-política** 27-40  
Marzo - Junio 2023  
David Anchaluisa

## **TEMA CENTRAL**

---

**Ecuador en el concierto de la violencia de América Latina** 41-43  
Fernando Carrión y Emilia Silva

**La seguridad como excepción ¿Hacia dónde va Ecuador?** 45-73  
Carolina Andrade

**El territorio unificado del crimen en el Ecuador** 75-105  
Fernando Carrión Mena

**Violencia y delincuencia en el Ecuador:  
principales problemas, mitos y desafíos** 107-130  
Lautaro Ojeda Segovia

**Seguridad ciudadana: entre la violencia interpartidista,  
el conflicto armado y el narcotráfico (1950-2022)** 131-159  
Hugo Acero Velásquez

<b>Geografía de la violencia en México: el control territorial</b> Alfonso Valenzuela Aguilera	161-181
<b>La violencia que vimos ayer en la escuela</b> Emilio E. Dellasoppa	183-213

## **DEBATE AGRARIO**

---

<b>La huelga en la hacienda Llin-Llin (1979-1980)</b> Hernán Ibarra	215-225
--	---------

## **ANÁLISIS**

---

<b>Deriva necropolítica: violencia, temor y resignación en una política moderna agotada. Una <i>confusión</i> recordando a Francisco "Paco" Rhon</b> Eduardo Gudynas	227-249
---	---------

## **RESEÑAS**

---

<b>Republicanos Negros. Guerras por la igualdad, racismo y relativismo cultural</b> Miguel Ruiz Acosta	251-257
<b>La utopía reaccionaria. Radiografía del relato correísta</b> Lautaro Ojeda Segovia	259-263
<b>El desmantelamiento del multiculturalismo. Extractivismo y derechos indígenas en Ecuador</b> Juan Illicachi Guzñay	265-269

## Geografía de la violencia en México: el control territorial

Alfonso Valenzuela Aguilera\*

*Este trabajo se centra en identificar los factores determinantes de la percepción de inseguridad en entornos violentos en México. Los análisis demostraron que el territorio desempeña un papel central en esta percepción, ya que los delitos dejan una huella simbólica en el espacio urbano. La victimización y la frecuencia de la criminalidad también influyen en esta percepción, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y limitando su movilidad en el territorio. Además, se encontró una correlación entre la percepción de seguridad individual y las intervenciones sociales o espaciales por parte del Estado, de modo que aunque estas acciones suelen tener un impacto positivo, las condiciones específicas de cada ciudad, como el tráfico ilícito o la corrupción, pueden afectar la percepción ciudadana. Se confirma una relación dialéctica entre el territorio y la percepción de seguridad, subrayando la importancia de considerar el territorio en las políticas de seguridad para combatir el crimen organizado.*

### Los orígenes de la violencia en México

**E**n las primeras décadas del siglo actual tuvo lugar un significativo incremento de la violencia en México, lo cual puede atribuirse a una estrategia fallida por parte del Estado para enfrentar el crimen organizado mediante el uso de la fuerza coercitiva como principal mecanismo de disuasión. Sin embargo, distintos análisis sobre este periodo destacan que al privilegiar esta estrategia sin antes fortalecer el Estado de derecho, permitió la acción de grupos paralelos compitiendo por el monopolio de la fuerza, disminuyendo la capacidad institucional para procurar justicia y mantener un sistema legal funcional (Magaloni y Razu, 2016: 57; Valenzuela, 2016: 34). En dicho periodo la violencia creció de manera considerable en América Latina; y aun cuando México no se encuentra entre los primeros países con las mayores tasas de homicidio, nueve ciudades mexicanas se encuentran entre las diez más violentas del mundo.

Lo anterior confirma el argumento de que los índices de violencia más altos se concentran en los países con gran desigualdad, más que con elevada pobreza, dado que se trata de la segunda economía de la región. En ese sentido, argumentamos que las violencias no necesariamente están relacionadas con el

---

\* Doctor en Urbanismo, Profesor en la Universidad Autónoma de Morelos, México. E-mail: aval@uaem.mx.

crimen organizado, sino que sobre estas, también juega un rol central el contexto familiar, institucional, socioeconómico; así como la falta de perspectivas de vida de la población.

La violencia es multicausal, pero se evidencia en la cantidad de homicidios dolosos registrados a lo largo del tiempo. En el caso de América Latina en el año 2018, Brasil, Colombia, México, Venezuela y tres países centroamericanos (El Salvador, Guatemala y Honduras) concentraron el 93% de los homicidios en la región (Naciones Unidas, 2021). Al respecto, un estudio reciente sobre las determinantes de los homicidios en la región concluye que entre las más importantes destacan el crecimiento del crimen organizado, la disponibilidad de armas de fuego, la polarización socioeconómica, la ausencia de un Estado de derecho y las condiciones estructurales de una economía desigual (Hernández Bringas, 2021).

Es por ello que existen factores sociales, económicos, políticos, estratégicos y simbólicos que se combinan en los distintos escenarios presentes en el territorio, por lo que resulta fundamental comprender el concepto de violencia, ya que este involucra diferentes manifestaciones, no sólo vinculadas con el crimen organizado sino también con la vida cotidiana de las personas. En este sentido, un aspecto importante que ha sido estudiado en los últimos años, es que la violencia estructural se manifiesta primero en la violencia doméstica, íntima o familiar, generando consecuencias emocionales en la familia, y que después afecta el sentido de dignidad, valor y respeto de las personas.

En muchos casos, existen condiciones psicológicas, familiares y emocionales que contribuyen al desarrollo de comportamientos violentos, además de las desventajas estructurales que enfrentan amplios sectores de la población y que van más allá de la presencia de grupos delictivos en el territorio.

De este modo, la apuesta por el combate contra el crimen organizado en México, basada en el uso de la fuerza, llevó a asignar un presupuesto de seguridad pública equiparable al destinado a la educación, la salud o el desarrollo social (México Evalúa, 2011). No obstante, esto no fue suficiente para resolver el problema, especialmente porque no se afianzó el sistema de justicia a través del fortalecimiento de las instituciones correspondientes.

Lo anterior resulta fundamental si consideramos que uno de los elementos estructurales del crimen organizado ha sido la simbiosis entre las esferas legales e ilegales, de modo que en muchas ocasiones los agentes del Estado encargados de combatir el crimen organizado se han coludido, o incluso se han unido a los grupos delictivos a los que originalmente debían enfrentar. Si a esto agregamos que en la historia reciente la tasa de impunidad ha rondado el 93%, en donde

apenas un 7% de los casos fueron esclarecidos y los responsables llevados ante la justicia, entenderemos los retos inmediatos que tiene México para establecer un Estado de derecho efectivo y funcional.

## La caracterización de la violencia en las ciudades

Las ciudades tienen una lógica espacial determinada, en donde existe una estructura física cuya percepción se ve alterada por las relaciones de poder y por el uso instrumental que se le da a los espacios. Si aplicamos el enfoque de Manuel Castells sobre la organización espacial del poder al interior del espacio de flujos el cual tiene un impacto en la apropiación y funcionamiento de los lugares (1997: 461), entonces podemos argumentar que el crimen organizado se conforma como una poderosa estructura que altera el significado, los usos y las dinámicas de los espacios urbanos. Desde esa perspectiva, los mercados ilícitos se desplazan a través de flujos que atraviesan puntos específicos en el territorio, imprimiéndoles dinámicas que luego se vuelven habituales, desdibujando así las prácticas cotidianas anteriores e imponiendo nuevos parámetros de lo que se considera socialmente aceptable.

La inseguridad ha sido el principal problema para los mexicanos desde la Tercera Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015. Este fenómeno tiene una dimensión empírica y una perceptual, siendo esta última la que deteriora la calidad de vida de la población en general. Algunos autores sugieren que el miedo al delito genera un impacto emocional y conductual, reflejado en un aumento en la sensación de inseguridad, que llega a inhibir el uso del espacio urbano (López, 2016: 3). Dicha condición afecta el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, generando impactos tanto en la salud física como psicológica de la comunidad, además de inhibir la convivencia social y el uso de los espacios públicos.

Además, esto ha dado lugar a formas privadas de autoprotección así como a reacciones sociales punitivas hacia el delito (Díaz et al., 2001). Es por ello que comprender mejor la relación entre el impacto de la victimización y el uso del espacio urbano permite a los responsables de la toma de decisiones reducir los costos de seguridad y salud pública, así como mitigar los efectos derivados del delito a través de intervenciones estratégicas en el territorio.

Antes de examinar la percepción de la violencia, es importante detenerse en la naturaleza de las emociones, las cuales se originan a partir de la integración de factores objetivos y subjetivos, mediados por el sistema nervioso y los sistemas



hormonales, dando lugar a una experiencia emocional que genera procesos cognitivos y que además provoca una conducta reactiva (Pérez Pàmies, 1998: 85). Desde este planteamiento se reconocen emociones básicas como la alegría, el enojo, la tristeza, la sorpresa, la aversión y el miedo, el cual será relevante para el presente análisis -ya que su manejo se ha convertido en un factor crucial para asegurar el funcionamiento de la sociedad y la calidad de vida de los ciudadanos-. Frente a la creciente inseguridad en México, el miedo ha generado una sensación constante de alerta entre la población frente a la posibilidad de convertirse en víctima, manteniendo un riesgo latente de sufrir actos violentos en el espacio cotidiano.

El fenómeno de la percepción requiere analizar procesos que se desarrollan en dimensiones psicológicas, emocionales, materiales y sociales, a través de los cuales se pueden identificar los mecanismos de la construcción espacial del miedo (Valenzuela, 2016). Es por ello que destacamos la importancia de la percepción en cuanto a la identificación de espacios urbanos seguros, como elemento clave para generar mecanismos de resiliencia social a través de prácticas cotidianas.

La seguridad tiene un componente territorial innegable, ya que se manifiesta en las dinámicas de flujo de los espacios de circulación y arraigo que caracterizan a las ciudades contemporáneas. Por tanto, resulta fundamental definir el espacio transitable desde la perspectiva de la seguridad, ya que esto incorpora los diferentes mecanismos de movilidad dentro del entorno urbano y, en última instancia, revela la percepción de riesgo latente que experimenta el ciudadano en sus desplazamientos diarios. En este trabajo abordamos el impacto emocional del miedo en el uso del espacio urbano en las ciudades mexicanas, así como las diferencias en la percepción a partir de intervenciones espaciales en el territorio. Es mediante el análisis de datos a nivel micro de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2015), que buscaremos establecer las correlaciones estadísticamente significativas entre los delitos que afectan directamente la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, el miedo al crimen se ha planteado como el resultado de una forma particular de interacción entre las personas y su entorno, condicionando la manera en que los individuos se desenvuelven en el territorio (Segura, 2009: 66). En este sentido, existen diversas formas de medir la percepción de inseguridad en el espacio geográfico, ya sea a través de encuestas, entrevistas, observación sistemática o incluso mediante materiales literarios o mapas mentales (Capel, 1973: 76). Sin embargo, estas metodologías se han enfrentado a desafíos de complejidad teórica al momento de establecer una medición confiable de la percepción del miedo al crimen.

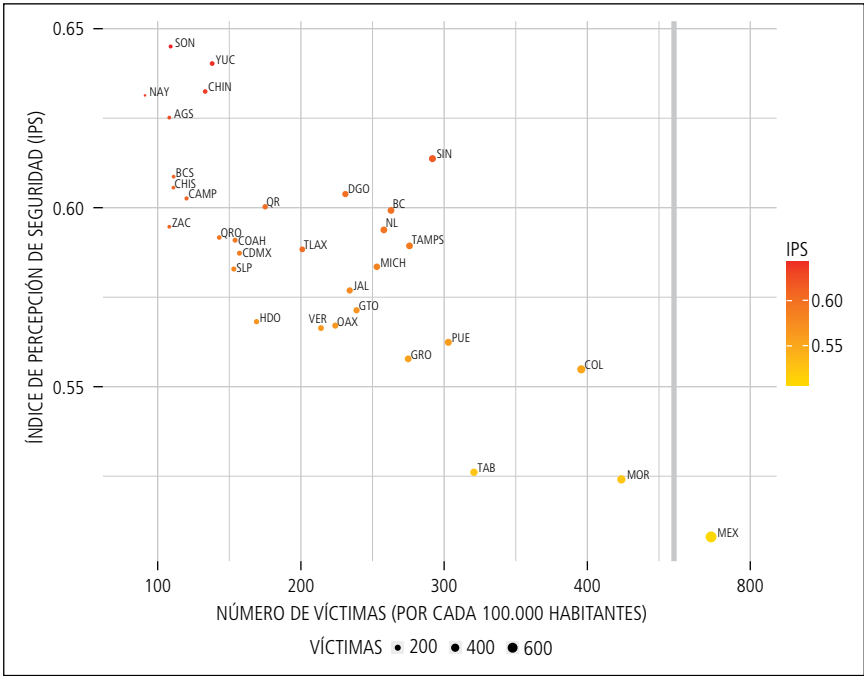
Algunos investigadores han encontrado dificultades para elaborar instrumentos que tengan suficiente validez estadística, además de que las respuestas de los encuestados a menudo mezclan el miedo al crimen con otras emociones. Es por ello que se han identificado variaciones significativas en función de la edad, el género, el nivel socioeconómico, la escolaridad, el estatus laboral, la ocupación, los medios de transporte utilizados y los tiempos de desplazamiento (Vilalta, 2010: 6). A pesar de estos desafíos, dichos estudios han arrojado resultados importantes con relación a los factores asociados con la percepción del miedo en el territorio.

## La percepción de seguridad y su correlación con los delitos

En México, los estados de Morelos, México y Colima presentan las tasas más altas de víctimas por cada habitante, lo cual está en línea con la elevada percepción de inseguridad reportada por la población de dichas entidades en 2015. Sin embargo, a pesar de que Tabasco, Sinaloa y Guerrero no tuvieron índices delictivos particularmente altos en 2014, han experimentado un aumento constante en la criminalidad durante la última década. Esto se refleja en un notable repunte de los índices en años anteriores y un recrudecimiento de la violencia en 2016, coincidiendo con cambios en las rutas de tráfico ilícito y el reposicionamiento de las organizaciones delictivas en la lucha por el control territorial.

Una de nuestras áreas de investigación se centra en contrastar la relación entre el número de personas que han sido víctimas de delitos graves (como secuestro, violación y robo) y su percepción de seguridad, medida a través del Índice de Percepción de Seguridad (IPS) a nivel geográfico por entidad federativa. Es importante destacar que el IPS se basa únicamente en la opinión de las personas que han sido victimizadas (ver Gráfico 1). Al analizar el gráfico, observamos que los estados con las tasas más altas de delitos por cada 100.000 habitantes también presentan la percepción de seguridad más baja en el país. Esto es evidente en los casos de los estados de México, Colima, Tabasco y Morelos. Sin embargo, no siempre existe una coincidencia directa entre estos dos indicadores.

Gráfico 1. Índice de Percepción de Seguridad (IPS) y delitos graves



Fuente: INEGI/ENVIPE, 2015.

Otro punto de interés es la concentración de estados en la zona central, en donde, a pesar de una considerable reducción en la cantidad de delitos graves, la percepción de seguridad sigue siendo baja (Puebla, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca); en tanto que las entidades con la mejor percepción de seguridad coinciden con bajos índices delictivos, como Sonora, Yucatán, Chihuahua, Nayarit y Aguascalientes.

A continuación, examinaremos la geografía del crimen a nivel regional analizando la manera en que se comporta la percepción de seguridad por regiones, lo que nos permitirá identificar dinámicas relacionadas con las rutas del crimen organizado. Estas dinámicas se muestran en el mapa 1, y se pueden identificar concentraciones que incluyen la región central del país, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, con una clara dirección hacia las costas. Desde allí se extiende el conocido Corredor de la violencia, que atraviesa los estados de Morelos y Guerrero y culmina en el puerto de Acapulco, que ha mantenido altos índices delictivos en los últimos años (Peña y Ramírez, 2015).

Otro corredor importante comienza en el estado de Guanajuato, atraviesa Jalisco y llega a la costa, incluyendo una concentración significativa en el estado de Colima. La región sureste del país también presenta una baja percepción de seguridad, destacando los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, y agravándose en Tabasco. Estas entidades han sido dominadas por organizaciones delictivas muy poderosas, como el cártel del Golfo y Los Zetas. Además, el estado de Tabasco colinda con Guatemala, convirtiéndose en una zona de tránsito de estupefacientes provenientes de Sudamérica. La distribución geográfica de la percepción de seguridad parece coincidir con las áreas identificadas por varias fuentes como territorios en disputa en la región centro-sur del país. Por otro lado, las zonas con menores índices delictivos o percepción de seguridad intermedia coinciden con las áreas dominadas por una organización delictiva en particular, ya sea el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Los Zetas.

Mapa 1. Victimización por delitos graves por estado, por cada 100.000 habitantes



Fuente: INEGI/ENVIPE, 2015.

En el mapa anterior se puede observar la relación entre la victimización y la percepción de seguridad entre los habitantes por entidad federativa. Destaca el caso del Estado de México, donde se registra un índice de victimización de 747 por cada 100.000 habitantes, seguido por Morelos con 424 y Colima con 396. En los tres casos, se observa un bajo índice de percepción de seguridad, lo cual coincide con la alta victimización registrada.

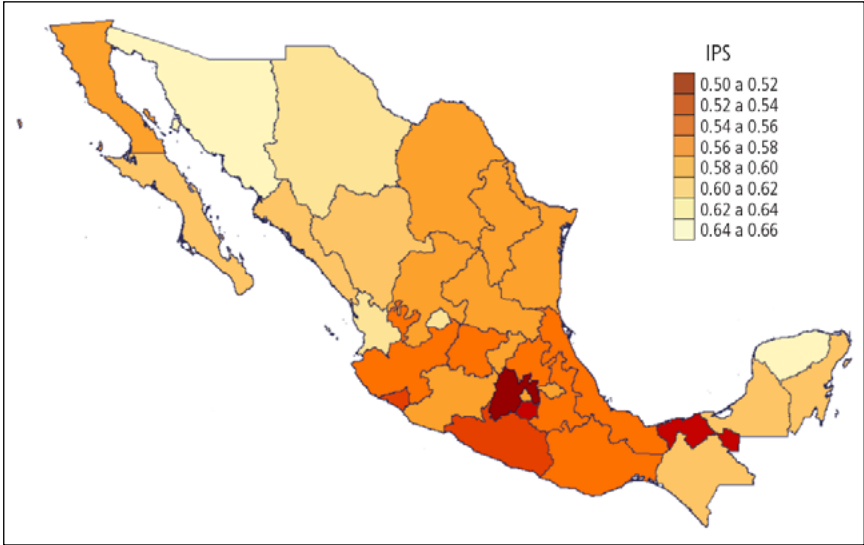
Un caso singular es el estado de Sinaloa, donde, a pesar de tener un elevado índice de victimización, se mantiene una percepción de seguridad relativamente alta. Esta situación podría estar relacionada con la historia de violencia recurrente en las últimas cuatro décadas en la región, lo que podría haber llevado a la normalización del delito en la vida cotidiana. Otros casos como Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí y Quintana Roo, que son los estados que presentan un índice de percepción relativamente alto. Sin embargo, en el año siguiente a la encuesta, se registraron episodios de violencia en centros turísticos como Cancún y en las áreas periféricas de la ciudad de Zacatecas.

## La percepción de la seguridad y sus determinantes

Para evaluar el impacto de la percepción de seguridad en el uso del espacio urbano, utilizamos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2015). Esta encuesta es parte de una serie estadística generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, se utilizó el Marco Nacional de Viviendas 2012 del INEGI como base para la elaboración de los mapas delictivos. Este marco se construyó utilizando información cartográfica y demográfica del Censo de Población y Vivienda 2010. El diseño muestral empleado en la encuesta es probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados, lo que permite generalizar los resultados obtenidos a toda la población. A partir de los datos de la ENVIPE 2015, construimos el Índice de Percepción de Seguridad (IPS), que considera variables relacionadas con el sentimiento de propensión al riesgo de los individuos. Realizamos un primer análisis por entidad federativa, como se muestra en mapa 2.

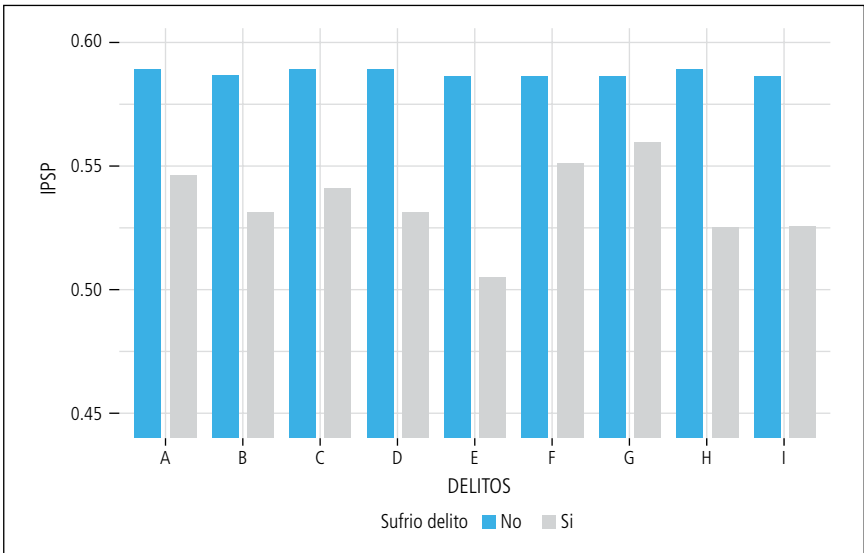
Encontramos que, más allá de los casos en los que coinciden altos índices delictivos con una baja percepción de seguridad, es destacable que tanto la región del Bajío como la región Centro-Sur registran una percepción de seguridad bastante comprometida, a pesar de no tener un índice delictivo particularmente alto. A continuación, realizamos una comparación entre el Índice de Percepción de Seguridad (IPS) y un segundo Índice de Cohesión Social (ICS). En un primer análisis buscamos detectar si el primero -construido a partir de variables que reflejan el sentimiento de inseguridad, desconfianza y miedo en las personas- tenía una relación directa y causal con la capacidad de organización social para enfrentar colectivamente una amenaza, intervenir en situaciones que afectaban a los vecinos o proteger la integridad del vecindario (ver gráfico 2).

Mapa 2. Índice de Percepción de Seguridad Personal (IPSP) por estado en 2015



Fuente: INEGI/ENVIPE, 2015.

Gráfico 2. Índice de Percepción de Seguridad (IPS) e Índice de Cohesión Social (ICS)



Fuente: INEGI/ENVIPE, 2015.

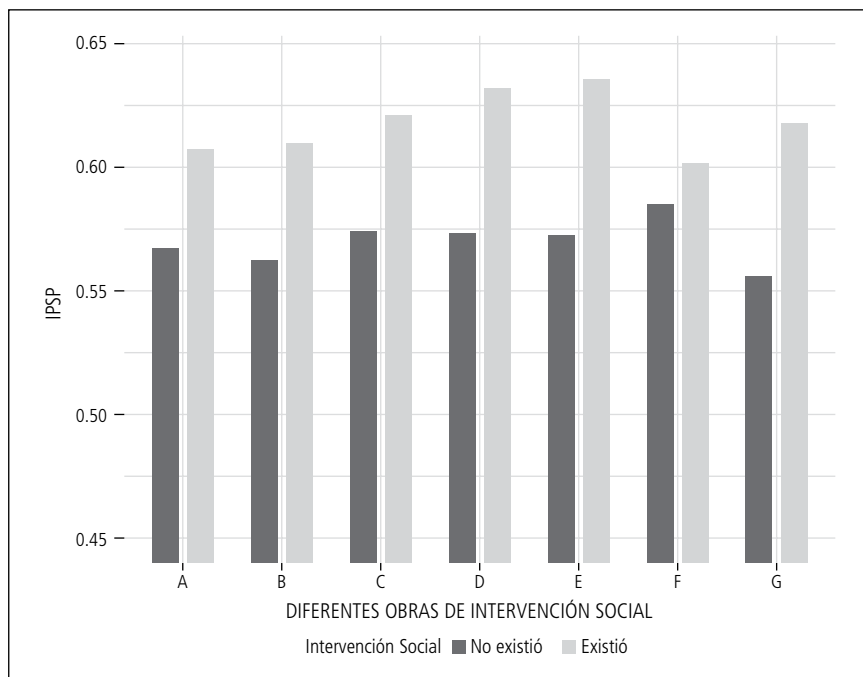
**Nota:** En el eje Y se muestra el valor del Índice de Percepción de Seguridad Personal (IPSP). La variable refiere si el encuestado experimentó o no los delitos/eventos referidos en el eje X: (A) robo de accesorios de auto; (B) robo total de vehículo; (C) grafiti o daño a vehículo o vandalismo; (D) ingreso a domicilio por la fuerza con intento de robo; (E) secuestro; (F) desaparición forzada por autoridad o grupo delictivo; (G) asesinato; (H) robo, asalto en calle o en cajero; (I) intento de violación. Se realizaron pruebas de T-Student y todas resultaron significativas.

A partir de este análisis, se observó que aparentemente los residentes se organizaron para resolver problemas relacionados más directamente con su entorno, como la mejora de la iluminación pública y la prevención de robos en la vía pública. Sin embargo, se identificó que el pandillerismo violento y la delincuencia en las cercanías de las escuelas representaban una problemática que implicaba un mayor riesgo para los transeúntes. En estos casos, los ciudadanos no mostraron disposición a intervenir cuando su integridad física estaba en peligro, asumiendo que serían las fuerzas del orden las responsables de abordar esas situaciones. No obstante, en este análisis no se observaron cambios significativos en la capacidad de respuesta de la comunidad en términos de eficacia colectiva.

El gráfico 3 revela de manera consistente que la victimización tiene un impacto directo en la percepción de seguridad de los individuos. Sin embargo, lo que resulta aún más notable es que los delitos de secuestro, robo en la vía pública e intento de violación tienen una correlación más estrecha con la percepción de seguridad personal que cualquier otro tipo de delito. Además, los delitos relacionados con el entorno construido, como el robo y el allanamiento de morada, también están vinculados emocionalmente a la posibilidad de ser víctima nuevamente en lugares similares.

Como hemos planteado en el apartado teórico, la percepción de seguridad no solo está relacionada con la victimización, sino que también se ha argumentado que está influenciada por la confianza de los ciudadanos en las autoridades y por las intervenciones sociales promovidas por el gobierno en el entorno urbano, las cuales pueden generar un sentido de pertenencia en la comunidad. Con este propósito, hemos desarrollado el Índice de Percepción de Intervención Institucional (IPII) y lo hemos contrastado con el Índice de Percepción de Seguridad utilizado anteriormente, con el objetivo de identificar posibles correlaciones entre ellos.

Gráfico 3. Relación entre el IPII y el Índice de Percepción de Seguridad (IPS)



Fuente: INEGI/ENVIPE, 2015

**Nota:** En el eje X se representan en gris claro las diversas intervenciones sociales que los ciudadanos reportaron haber experimentado en sus ciudades o localidades en los últimos años, mientras que se utiliza el gris oscuro cuando no identificaron tales intervenciones. En el eje Y se muestra el valor del Índice de Percepción de Seguridad. Las intervenciones sociales mencionadas son las siguientes: (A) construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas; (B) mejoras en el alumbrado público; (C) mejoramiento en el ingreso de las familias; (D) atención al desempleo; (E) programas dirigidos a jóvenes para reducir el pandillerismo y la delincuencia juvenil; (F) organización comunitaria para contratar seguridad privada; (G) incremento del patrullaje y vigilancia policial.

Mediante pruebas de t de Student (T-test), se encontró que todas las diferencias entre los grupos fueron significativas. En este análisis, destacan los factores que tuvieron un impacto importante en la mejora de la percepción de seguridad de los habitantes. Estos factores incluyen aspectos fundamentales relacionados con muchas problemáticas sociales, como la mejora del ingreso familiar, la creación de oportunidades laborales y las medidas sociales para prevenir el



pandillerismo y la delincuencia juvenil. Por otro lado, los espacios deportivos y la contratación de seguridad privada pueden estar fuera del alcance de la mayoría de la población, por lo que los ciudadanos dirigen su atención hacia problemas más urgentes en su entorno social.

Parece evidente que tanto la geografía como las intervenciones concretas desempeñan un papel crucial en la percepción de seguridad en el territorio. De hecho, otros indicadores también han registrado un aumento en el índice de satisfacción de los residentes cercanos a los espacios intervenidos, según informes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en 2015. Además, se observó un incremento del 183% en el indicador que promedia las acciones de impulso a la organización social y la seguridad comunitaria entre 2013 y 2014. Sin embargo, se sugiere evaluar el diseño del programa para valorar las metas propuestas y aprovechar al máximo el considerable aumento en los indicadores correspondientes, según el mismo informe de SEDATU. Posteriormente, desarrollamos un Índice de Percepción de Seguridad Territorial que visualiza la seguridad desde la perspectiva del territorio, reflejando que el espacio urbano desempeña un papel fundamental en la definición de una sensación de resguardo o protección ante posibles riesgos.

## Las políticas públicas de desarrollo social frente a la violencia

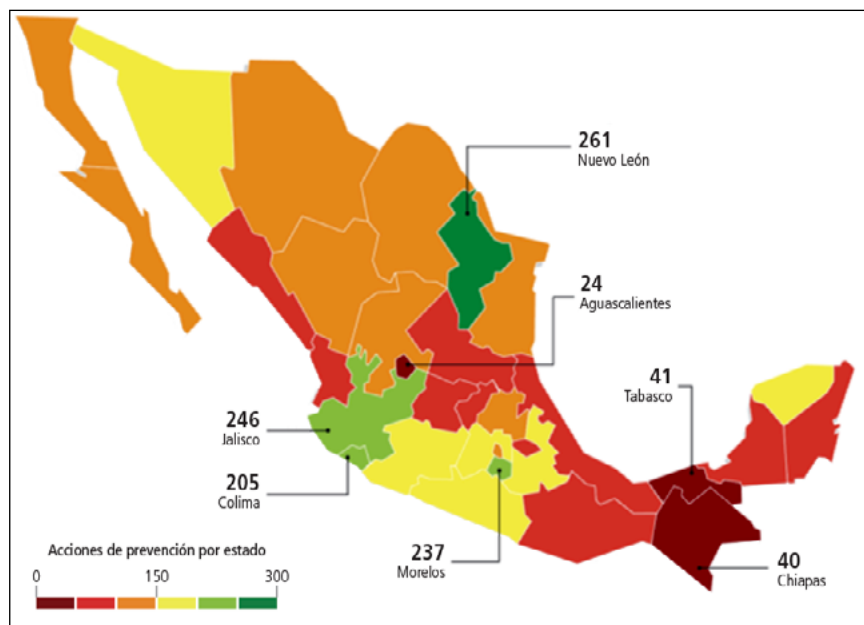
A partir del análisis anterior, se hace evidente que el espacio público desempeña un papel clave en la seguridad. En este sentido, cabe preguntarse cuál ha sido el resultado de los programas de mejoramiento urbano, creación y mantenimiento de espacios públicos en la prevención del delito en México. En 2007, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) implementó el Programa Rescate de Espacios Públicos como una estrategia para abordar el déficit de equipamientos en las ciudades mexicanas y fortalecer el tejido social. El objetivo original era fomentar la construcción de identidades colectivas y promover relaciones sociales saludables, seguras y constructivas. Se consideraba que los espacios públicos eran lugares de interacción entre ciudadanos, escenarios de encuentro, expresión y convivencia, donde cada individuo reafirma su sentido de pertenencia a un grupo, una sociedad o una nación.

Como parte de la estrategia, se propuso intervenir en los espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que conforman el Sistema Urbano Nacional. El propósito de estas intervenciones era lograr la mejora integral

de los espacios públicos a través de obras físicas de mejoramiento y acciones de beneficio social, con el objetivo de proporcionar a las comunidades vecinas espacios seguros donde pudieran disfrutar de actividades deportivas, culturales y recreativas, fortaleciendo así la cohesión social y comunitaria.

El programa distinguía entre acciones de prevención, como el remozamiento y la construcción de espacios, y acciones logísticas, como talleres y cursos. Para tener una idea de la escala de inversión, en 2014 se destinaron 949 millones de pesos, de los cuales el 84% se asignó a intervenciones de prevención y el 16% se destinó a acciones logísticas. En el año siguiente, se intervinieron 337 espacios públicos, beneficiando a una población cercana a los 1.3 millones de habitantes, en un esfuerzo por contrarrestar la violencia que se había desatado durante la administración anterior.

Mapa 3. Acciones de prevención del delito por estado



Fuente: PRONAPRED, 2015.

En el mapa se visualizan las intervenciones realizadas en 2015 como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED); en este se destaca la asignación diferenciada de recursos tanto para acciones de prevención como para acciones logísticas. A partir de estas intervenciones, se buscó determinar si la población percibía la implementación de acciones gubernamentales para la prevención del delito, con el objetivo de estimar la eficacia de dichas intervenciones.

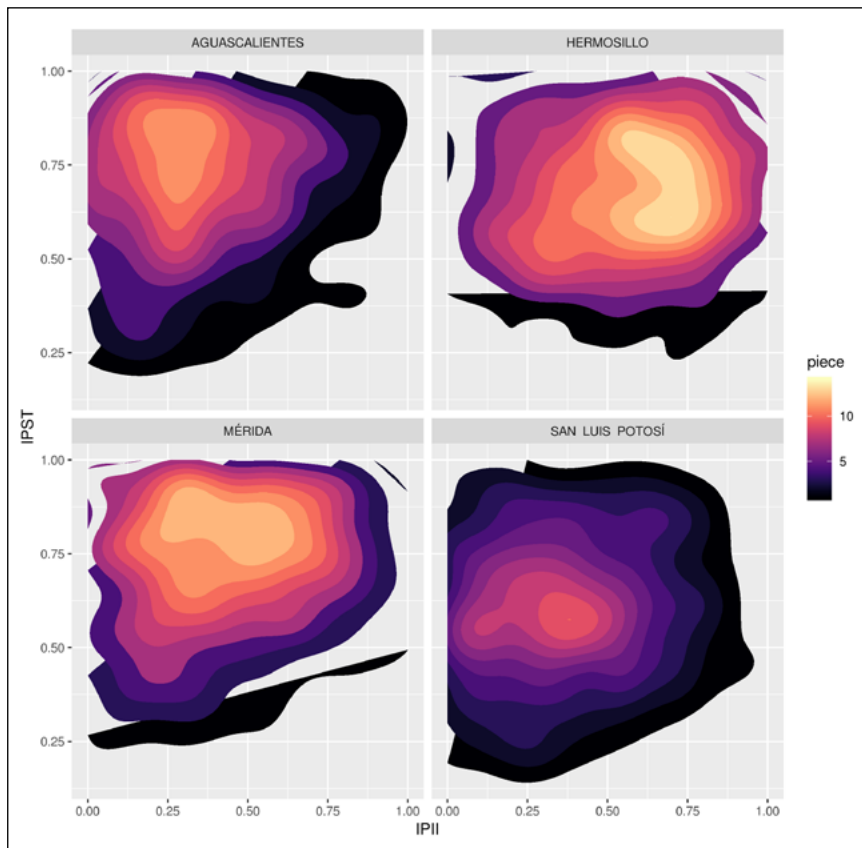
Resulta interesante destacar que durante el periodo mencionado (2014-2015), el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2013) registró una mejora en los indicadores de asistencia al espacio público y percepción de inseguridad, especialmente en aquellos espacios que habían sido intervenidos por el programa en los seis años anteriores. Sin embargo, el indicador que evalúa la cohesión social entre los residentes no mostró cambios significativos durante ese periodo, lo que sugiere una mayor efectividad de las acciones de mejora del entorno en comparación con las acciones de carácter social (CONEVAL, 2013: 1).

Por otro lado, una evaluación externa realizada por investigadores del Colegio de México indicaba un aumento del 43% en el indicador de inseguridad en los espacios intervenidos por el programa entre 2009 y 2014, y recomendaba analizar detenidamente las causas de la percepción de inseguridad en dichas áreas para implementar acciones específicas que contrarrestaran esta situación (CONEVAL, 2013: 5).

## La intervención institucional como factor de seguridad territorial

Por último, se examina la correlación entre la percepción de las acciones estatales destinadas a la prevención del delito y su impacto en la percepción de seguridad territorial por parte de los individuos. Para este análisis se seleccionaron cuatro ciudades con los índices delictivos más altos en 2015, así como cuatro ciudades con el menor número de incidentes en el mismo año. Es importante señalar que estas intervenciones pueden o no estar relacionadas con las acciones registradas y mapeadas por lo que para analizar esta relación se tomaron en cuenta las cuatro ciudades con los índices delictivos más bajos reportados en 2015 (Hermosillo, Tijuana, San Luis Potosí y Querétaro), lo cual revela contrastes entre la percepción de seguridad territorial y las intervenciones estatales realizadas.

Gráfico 4. Ciudades con menores índices delictivos en la República Mexicana



Fuente: ENVIPE, 2015

Las correlaciones entre el Índice de Percepción de Seguridad Territorial (IPST) y el Índice de Percepción de Intervención Institucional (IPII) en el caso de Hermosillo muestran que coinciden con 101 acciones de prevención y 49 acciones de logística llevadas a cabo por el PRONAPRED. En el gráfico 4 se observa una concentración estadística en la esquina superior derecha, lo que indica una alta percepción de intervención pública (IPST alto). Sin embargo, no se puede determinar si estos índices son la causa de la disminución en los índices delictivos o si ocurre lo contrario. En el caso de Tijuana, se registra un menor número de acciones de prevención y logística, lo cual se refleja en la baja percepción de la ciudadanía al respecto. A pesar de esto, se observa un IPST alto.

Sin embargo, la situación en esta ciudad es más compleja, ya que después de un período (2010-2012) en el que las tasas de homicidio disminuyeron considerablemente (debido en parte a la participación empresarial y a la represión violenta por parte de las fuerzas armadas), la violencia aumentó nuevamente en 2015 debido a la lucha por el control del territorio entre los cárteles de Sinaloa, del Pacífico y Jalisco Nueva Generación. Esto significa que la aparente calma en el territorio no continuó en los años siguientes.

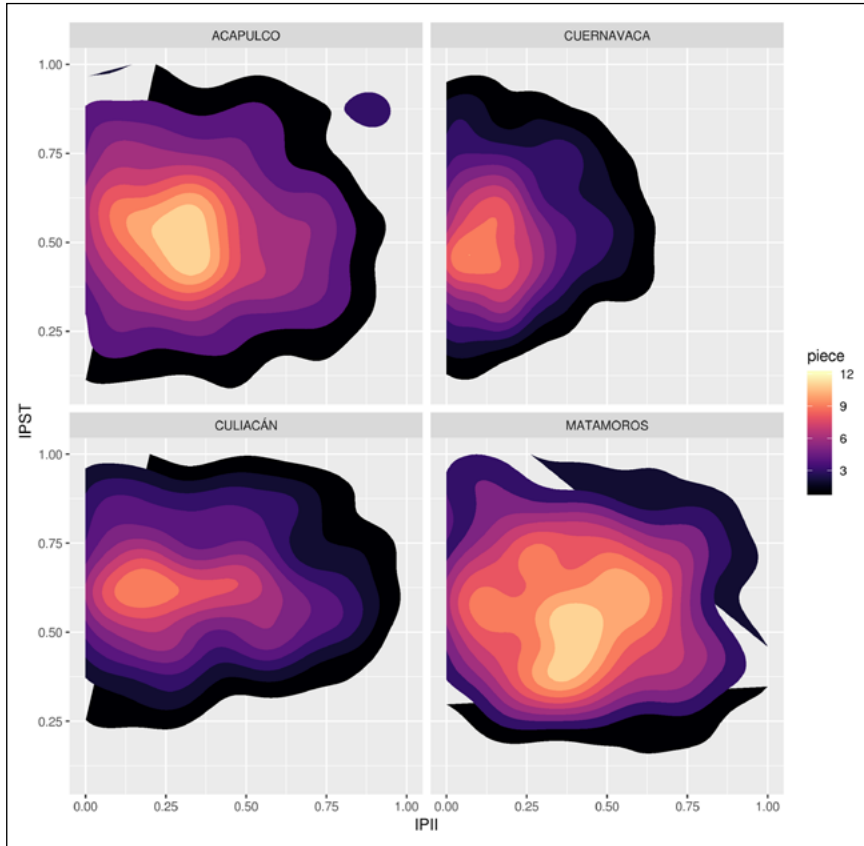
En el caso de San Luis Potosí, se observan correlaciones entre el IPST y el IPII que muestran un número moderado de acciones de prevención y logística. A pesar de ello, los habitantes mantienen un IPST alto y un IPII por encima de la media. Es importante destacar que en este análisis se está considerando la violencia relacionada únicamente con homicidios y no se tienen en cuenta delitos específicos como el feminicidio, que tiene un índice particularmente alto en esta ciudad. Por último, en Querétaro se registran intervenciones moderadas de prevención y logística por parte del PRONAPRED, y sin embargo existe un IPST alto. Al igual que en el caso anterior, existen otros delitos que no se han considerado en este estudio, como el abuso sexual infantil, que es particularmente alto tanto en Querétaro como en Tlaxcala.

En contraste, se seleccionaron cuatro ciudades que en 2015 tenían los índices delictivos más altos: Veracruz, Acapulco, Cuernavaca y Villahermosa, las cuales han experimentado una persistencia de violencia a lo largo de los años (ver gráfico 5). El puerto de Veracruz se destaca por tener un Índice de Percepción de Intervención Institucional (IPII) muy bajo, lo que podría relacionarse con el gobierno impopular y represivo de Javier Duarte (2010-2016). Aunque las acciones de prevención (30) y logística (17) podrían haber mejorado la percepción; el Índice de Percepción de Seguridad Territorial (IPST) se registra por encima de la media, lo que sugiere que la inseguridad se concentra en puntos específicos de la ciudad.

En el caso de Acapulco, un puerto vinculado al tráfico de drogas tanto por vía terrestre como marítima y escenario de conflictos territoriales frecuentes, parece ser importante el impacto de las acciones de prevención (95) y logística (47) en el territorio, lo cual se refleja en el IPII. Sin embargo, a pesar de ello, el IPST se mantiene apenas por encima de la media, lo que situaba a Acapulco como el municipio más violento del país en 2015. Cuernavaca, por su parte, aún estaba inmersa en una espiral de violencia ascendente en ese periodo. A pesar de las intervenciones estatales con acciones de prevención (154) y logística (56), tanto el IPII como el IPST se encuentran por debajo de la media. Esto indica que la

población se sentía insegura en su territorio y no percibía la pertinencia de las acciones del gobierno para resolver los problemas de inseguridad.

Gráfico 5. Ciudades con mayores índices delictivos en la República Mexicana



Fuente: INEGI/ENVIPE, 2015.

Según el Índice de Paz elaborado por el Instituto de Economía y Paz para las 76 ciudades más grandes del país, Cuernavaca tenía la tasa más alta de delitos violentos a nivel nacional. Finalmente, en Villahermosa, que en 2015 registraba el mayor porcentaje de población que se sentía insegura en la ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-INEGI), se llevaron a cabo un número reducido de acciones de prevención (28) y logística (16), lo cual

se refleja en el IPII. Como era de esperar, el IPST fue comparable al de Cuernavaca, lo que refleja la insatisfacción de la población con los niveles de protección que aspiraba a tener al menos en su entorno cercano.

## Conclusiones preliminares

El propósito de este estudio fue identificar los factores determinantes de la percepción de inseguridad de los ciudadanos en entornos violentos. A través de una serie de análisis empíricos, se encontró que el territorio es un factor central en la construcción de dicha percepción, ya que los delitos dejan una huella simbólica en el espacio urbano, especialmente en aquellos que han sido víctimas de un delito o en ciudades donde la criminalidad es recurrente. En este sentido, la victimización se demostró como un factor determinante en el cambio de rutinas y en la limitación de la movilidad en el territorio, lo cual tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Otro factor importante que surgió del análisis fue la correlación entre la percepción de seguridad individual y las intervenciones sociales o espaciales por parte del Estado. Aunque en la mayoría de los casos estas acciones tuvieron un impacto positivo en la percepción ciudadana, también se observó que las condiciones específicas de cada ciudad fueron determinantes en algunos casos, ya sea por estar en rutas de tráfico ilícito, estar dominadas por un grupo delictivo hegemónico o tener niveles históricos de corrupción que influyen en la percepción de la ciudadanía.

Por tanto, la percepción de seguridad está influenciada por diversas dimensiones emocionales que no siempre se correlacionan con la incidencia real de delitos o con las acciones de las instituciones en el territorio. En casos en los que las ciudades han experimentado altos niveles de violencia durante períodos prolongados, resulta más difícil para los ciudadanos recuperar la confianza en la capacidad de reacción y control del gobierno.

Por otro lado, en aquellas ciudades donde se han implementado intervenciones visibles por parte del gobierno, posiblemente acompañadas de políticas públicas complementarias, la percepción de seguridad territorial mejora significativamente. Además, el fenómeno de la victimización se convierte en un factor determinante en la percepción de espacios seguros en la ciudad y afecta directamente el uso del espacio urbano cuando los ciudadanos se ven obligados a restringir su movilidad después de ser víctimas de un delito. En este caso, se estima el impacto en la persona victimizada, pero aún es necesario medir la incidencia

indirecta del delito, es decir, los efectos sufridos por el núcleo familiar o afectivo del individuo, que también pueden ser igualmente significativos.

De este modo, verificamos la hipótesis de que existe una relación dialéctica entre el territorio y la percepción de seguridad, de modo que un espacio puede percibirse como inseguro debido a que la persona ha sido víctima de un delito en ese lugar, o porque el ciudadano percibe que las instituciones no son confiables, lo que aumenta su sensación de vulnerabilidad ante el riesgo. Las ciudades sufren el impacto de la violencia de múltiples formas y los espacios quedan marcados después de un evento delictivo, dejando marcas simbólicas tanto en el territorio como en los imaginarios de sus habitantes. Sin embargo, la presencia del Estado no pasa desapercibida y se refleja en los índices de percepción de seguridad de los ciudadanos, ya sea mediante la implementación de intervenciones de prevención y acciones logísticas, o mediante una presencia efectiva en el territorio urbano.

Tanto los espacios físicos como los del poder no pueden quedar desatendidos en un entorno violento, ya que son instrumentales para consolidar las actividades delictivas y permiten la creación de redes criminales paralelas al orden institucional, las cuales pueden volverse hegemónicas en poco tiempo. Por lo tanto, el territorio representa una dimensión estratégica para la contención del crimen organizado, y las políticas públicas en el ámbito de la seguridad deben considerarlo como un elemento fundamental para lograr resultados efectivos en el territorio.

## Bibliografía

- Capel, Horacio  
1973. "Percepción del medio y comportamiento geográfico". En *Revista de Geografía*, Vol. 7, N° 1.
- Castells, Manuel  
1997. *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Volumen I. La Sociedad Red. Alianza Editorial. Madrid.
- Díaz, Isabel; Rodríguez, Jeanne; Rodríguez, María C. y Ruiz, José  
2001. *Actitudes sociales hacia la delincuencia: su relación con la formación académica, el autoritarismo, la victimización y el miedo al delito* [tesis de grado]. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Hernández Bringas, Héctor  
2021. "Homicidios en América Latina y el Caribe: magnitud y factores asociados". En *Notas de Población*, N° 113.



López, Wilson

2016. “El perdón como condición para la construcción de una paz sostenible”. En *El Espectador* (15 de enero).

Magaloni, Beatriz y Razu, Zaira

2016. “Mexico in the Grip of Violence”. En *Current History*, Vol. 115, N° 778. University of California Press.

Peña, Rodrigo y Ramírez, Jorge A. (Coord.)

2015. *Violencias en Morelos. Atlas de la Seguridad y la Violencia en Morelos*. UAEM/ CASEDE. CDMX.

Pérez Pàmies, Montserrat

1998. *Psicobiología II*. Universitat de Barcelona. España.

Segura, Ramiro

2009. “Paisajes del miedo en la ciudad. Miedo y ciudadanía en el espacio urbano de la ciudad de la Plata”. En *Cuaderno Urbano Espacio, Cultura y Sociedad*, N° 8.

Valenzuela Aguilera, Alfonso

2019. “The third circuit of the spatial economy: Determinants of public policy in Latin America”. En *Regional Science Policy & Practice*, N° 11.

---

2016. *La construcción espacial del miedo*. Pablos, Juan Editor. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México.

Vilalta, Carlos

2010. “El miedo al crimen: estructura lógica, bases empíricas y recomendaciones iniciales depolítica local”. En *Gestión y Política Pública*, N° 9.

## Recursos Digitales

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México

2020. Reporte Seguridad, Justicia y Paz. Recuperado de: <https://n9.cl/9a8d7>.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo [CONEVAL]

2013. *Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 - 2013*. México. Recuperado de: <https://shorturl.at/clV13>.

ICSDP.

2010. Effect of Drug Law Enforcement on Drug-Related Violence: Evidence from a Scientific Review. International Centre for Science in Drug Policy. Vancouver.

Instituto Estatal de la Mujer

2010. *Amor y Violencia en el Noviazgo*. Villahermosa.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]

2015. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).

2015. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

2010. Censo de Población y Vivienda 2010. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2015. Encuesta Intercensal 2015. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Instituto para la Economía y la Paz [IEP]

2023. Índice de Paz México 2023. Recuperado de: <https://n9.cl/nkyai>.

México Evalúa

2011. *El gasto de seguridad. Observaciones de la ASF a la gestión y uso de recursos*. CDMX. México. Recuperado de: <https://n9.cl/2k3md>.

Programa Nacional de Prevención del Delito [PRONAPRED]

2015. “Lineamientos del PRONAPRED 2015. Glosario de términos”. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <https://n9.cl/nk9wa2>.

Subsecretaría de Desarrollo Agrario, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Vivienda [SEDATU]

2015. Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos. Diario Oficial de la Federación, México.

---

2007. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Programa de Rescate de Espacios Públicos.